

México: de potencia emergente a nación en emergencia

Oscar González

Quinto lugar en reservas petroleras potenciales - sólo después de la URSS, Arabia Saudita, Kuwait e Irán -, México apostó su futuro a la carta petrolera y el endeudamiento externo, logrando así, de 1977 a 1981, los índices de crecimiento económico más altos de su historia e iniciando un amplio proceso de modernización en todos los órdenes. Sin embargo, la reducción de los precios internacionales del crudo y la crisis financiera mundial fueron los factores internos que pusieron nuevamente a los 70 millones de mexicanos frente a todas sus carencias estructurales de nación subdesarrollada, dependiente comercial, financiera y tecnológicamente del poderoso país con el que comparte 3 mil kilómetros de frontera: Estados Unidos.

Tras de haber alcanzado un crecimiento de hasta 9.2 por ciento en el PIB (en 1979); de iniciar proyectos industriales de gran envergadura; de haber puesto en marcha un amplio proceso de reformas políticas que fomentó la oposición partidaria, ampliando de este modo los cauces para la crítica y la disidencia; de haber desarrollado consecuentemente una activa política exterior, especialmente opuesta a la intervención estadounidense en el área centroamericana, y de haber estructurado importantes programas sociales destinados a la promoción de empleos y al logro de la autosuficiencia alimentaria, México se vio inmerso en 1982 - año de la sucesión presidencial y, por tanto, de intensa actividad política en la más severa de sus crisis contemporáneas, condicionándose con ello la actuación del nuevo gobierno del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y poniendo a prueba, incluso, un complejo sistema de equilibrios que ha permitido seis décadas de estabilidad política y de continuidad en el poder de los gobiernos emanados de la primera revolución social del siglo.

Una herencia preocupante

Electo por votación ampliamente mayoritaria frente a otros seis candidatos, en las elecciones más concurridas que se hayan realizado en México, Miguel de la Madrid Hurtado (un abogado de 49 años, graduado de Harvard en Administración Pública y con no demasiada experiencia política) heredó el 1de diciembre de 1982 una situación económica preocupante signada por severas devaluaciones de la moneda; una deuda externa que asciende a los 80 mil millones de dólares que compite con la brasileña por la primacía mundial; una tasa de inflación cercana al cien por ciento; un agudo déficit presupuestal y serias

amenazas de parálisis sobre la planta productiva, con su correlativo de mayor desempleo e inflación.

Enfrentar la crisis de México requería medidas profundas y firmes. Y así lo entendieron tanto el gobierno entrante de Miguel de la Madrid como el de su predecesor, José López Portillo. En sus últimos dos meses como presidente de México, López Portillo había tomado dos decisiones radicales: la nacionalización de los bancos privados y el establecimiento del control integral de cambios: ambas medidas consideradas impracticables hasta el mismo día en que fueron tomadas, y sólo incluidas en los programas de la izquierda, conmocionaron profundamente el ambiente político: produjeron una virulenta reacción de la totalidad del sector privado mexicano y un amplio apoyo popular que incluyó al partido oficial y prácticamente a todos los organismos de la tradicionalmente dispersa izquierda. Ambas decisiones representaron pues un giro fundamental respecto a la política financiera seguida hasta entonces. El sexenio lópezportillista concluyó en medio de una fuerte expectativa suscitada por una investigación solicitada por el presidente al Congreso para que se dieran a conocer los nombres de quienes habían provocado la más fuerte salida de divisas en la historia de México: 34 mil millones de dólares, entre compras de inmuebles en el exterior y depósitos en bancos estadounidenses.

En materia económica, el nuevo gobierno estaba entonces marcado por el signo de la crisis. Era evidente que cualquier camino que se eligiera para el período 1982-1988 tendría que incluir, antes que nada, una política anticrisis de corto plazo. No obstante, en materia política y social el terreno no se mostraba adverso a la nueva gestión. Miguel de la Madrid, al iniciar su gobierno, contaba con un poder presidencial reconstituido en su proverbial fortaleza, luego de las medidas implementadas por su antecesor. En materia social había una alternativa inevitable para de la Madrid y su naciente gobierno: debía optar entre continuar por la ruta del nacionalismo revolucionario, en la cual se inscribían las medidas de López Portillo, o tratar de reconstituir la alianza con el sector privado y con los medios financieros internacionales.

Reprivatización parcial de la banca

"La comunidad internacional cobra nueva confianza en México", señaló de la Madrid en su mensaje de año nuevo, luego de un mes de gobierno. También señaló que "la empresa es la conjunción del esfuerzo de capital y trabajo, bajo una organización con fines comunes. Vamos a proteger la empresa en función de que nos da producción y empleo". Las heridas que dejó la nacionalización de la banca parecían restañarse. De la Madrid envió a la Cámara de Diputados en la madrugada del 28 de diciembre pasado una ley reglamentaria para el servicio de la banca y el crédito, según la cual los particulares pueden participar hasta con el 34 por ciento de las acciones de los bancos previamente nacionalizados. Esta medida, junto con el estricto apego a las recomendaciones del FMI en materia

financiera, de gasto público y cambiaría, además de una política salarial altamente restrictiva (los salarios recibieron un aumento de 25 por ciento máximo, luego de un año en que la inflación fue de 98.8 por ciento y se espera para 1983 un índice inflacionario de 60 por ciento), permitieron que México pudiera comenzar a crear nuevas condiciones para afrontar sus compromisos económicos y financieros. Pero esto ha ido creando también un clima de descontento que amenaza con deteriorar el equilibrio social.

Durante la discusión en el Congreso de la ley bancaria que autoriza otorgar 34 por ciento del patrimonio a los particulares, dos diputados del PRI votaron en contra de la medida, mientras que otros 50 congresistas del mismo partido gubernamental abandonaron la sala legislativa para evitar convalidar esa ley propuesta por el presidente. Los votos en contra y las abstenciones encubiertas provenían del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional, descontento no sólo porque se reprivatizará parcialmente la banca sino porque prácticamente no se estaban tomando en cuenta sus recomendaciones en materia política y económica. También votaron en contra de la nueva ley los legisladores que representan al Partido Socialista Unificado de México, principal agrupación partidaria de la izquierda, formada a partir de la fusión de diversas organizaciones, entre ellas el Partido Comunista Mexicano. Otro factor de descontento al interior del mismo gobierno es el sector de políticos tradicionales, desplazados en esta ocasión de los principales puestos del gobierno, quedando en su lugar un equipo de jóvenes técnicos en finanzas o contaduría.

Asertos presidenciales

En el equipo de gobierno de Miguel de la Madrid convergen de algún modo el liberalismo político (originado en la tradición juarista) y un cierto liberalismo económico. No obstante, mientras el equipo económico cumple a la perfección su tarea de contraer la economía mexicana, liberalizar el comercio y restringir el gasto público, en materia política todavía está por definirse si el nuevo gobierno optará por continuar y profundizar la ruta de las reformas políticas, o si se elige un camino de mayor control estatal de la oposición. Sin embargo, el presidente ha prometido evitar esto último. "Quiero un gobierno fuerte, pero rechazo el autoritarismo", dijo el presidente de la Madrid al cumplir un mes en el poder. "Buscaremos una solución a la crisis que no descansa sobre los salarios" señaló en otra oportunidad el mandatario. "Nuestro objetivo es una sociedad igualitaria", repitió muchas veces a lo largo de su campaña electoral y ya como presidente; "la política exterior de México no será alterada" enfatizó a una semana del cambio presidencial.

Estos asertos presidenciales se compagan en rigor, con las tradicionales banderas del partido oficial y sólo permite albergar dudas sobre su estricta observancia la gravedad misma de la crisis económica: pese a que está

virtualmente concluida la renegociación de la deuda exterior, sólo en el curso de 1983 deberán pagarse unos 10 mil millones de dólares por concepto de intereses.

Sometido a la triple y coincidente presión del Fondo Monetario Internacional, el gobierno mexicano, que ya no dispondrá de los milagrosos ingresos petroleros en un mercado saturado, deberá pugnar por evitar que la presente crisis económica devenga en explosiones de descontento social, en momentos en que los grupos de menores ingresos, las organizaciones políticas y sindicales opositoras e, incluso, el poderoso sector obrero del partido oficial - en primer lugar la influyente Confederación de Trabajadores de México - no parecen dispuestos a ser quienes paguen el costo de la crisis.

En este marco, las medidas económicas tomadas hasta el presente parecen estrechar el margen de maniobra del nuevo gobierno. Por ello, se intenta ya desde el comienzo, reconquistar la confianza popular en relación a otras demandas igualmente sentidas por la mayoría de la población. Así, se ha iniciado una campaña de moralización de la administración pública, se han disuelto cuerpos policíacos de dudosa eficiencia y factura anticonstitucional y se planean medidas de austeridad en el manejo del gasto público.

Si a lo anterior se le añade, en el plano de la política exterior, una ratificación - por lo menos en el nivel de las iniciales declaraciones de las nuevas autoridades - de la política independiente, antintervencionista y pacifista que siempre caracterizaron a la acción exterior de México, puede confiarse en que la estabilidad del país será preservada. No obstante, de la evolución de la crítica coyuntura económico-financiera dependerá el futuro de México en grado sumo.